

Paraguay. Mansa transición democrática

Rodríguez, José Carlos

José Carlos Rodríguez: Sociólogo paraguayo. Investigador del Centro de Documentación y Estudios - CDE, Asunción.

Por primera vez en su historia, el 9 de mayo de 1993 los paraguayos eligieron a un Presidente de la República en elecciones libres, competitivas y casi del todo limpias. El proceso de transición democrática, iniciado por el general Andrés Rodríguez en febrero de 1989, llega a su fin. La situación es políticamente compleja, pero aceptable para todos; para el general Rodríguez (entiéndase las Fuerzas Armadas) porque su sucesor oficioso, el ingeniero Juan Carlos Wasmosy, resultó electo para la jefatura del Estado; y para la oposición porque ella conquistó mayoría parlamentaria y tiene innumerables espacios de participación y poder a nivel municipal y departamental.

Cuatro años que transformaron al país

Cuando el 3 de febrero de 1989 los tanques del regimiento de Caballería, comandados por el general Andrés Rodríguez, ocuparon la capital y derrocaron al dictador Alfredo Stroessner, no habían muchas ilusiones. Los treinta y cuatro años de dictadura personal habían sido demasiados, los antecedentes democráticos muy débiles y los nuevos hombres del poder no eran sino los de antes, menos uno. Un chiste al respecto imagina que el dictador derrotado, desde su exilio, comentó ante las fotos de los titulares de la prensa paraguaya «Acá sólo yo faltó». Los demás estaban.

Pero las cosas tomaron otro rumbo y las rupturas fueron más profundas que las continuidades. En el breve tiempo de cuatro años se realizaron cuatro elecciones (dos presidenciales, una municipal y una constituyente), se rehicieron los padrones electorales, se promulgó una Ley Electoral democrática, se elaboró democráticamente y juró una nueva Constitución Nacional que equilibra los poderes del Estado. Durante todo el tiempo se gozó de una total libertad de prensa y opinión que transformó el clima político del país.

Hasta el Ejército omnipotente, que propuso la transición, fue tocado durante el transcurso de su proceso: generales fueron acusados de tráfico de automóviles robados; torturadores fueron sentenciados; los archivos «del horror» (de la dictadura

estronista) fueron abiertos al público; los sindicatos pudieron organizarse (de 20.000 pasaron a 130.000 afiliados); campesinos pudieron reivindicar tierra; medios censurados por la dictadura, como el diario ABC color y Radio Ñandutí, volvieron a funcionar y los que funcionaban pudieron expresarse con libertad.

Los comicios de la transición muestran que, pese a las falencias, en ellos se expresó la voluntad popular: el oficialismo tuvo 72% de votos en 1989; 45% en mayo; 55% en diciembre de 1992 y 40% en mayo de 1993. Detrás de estas cifras hay conductas y circunstancias políticas, desplazamientos reales de una opinión pública inmadura pero viva, ya no el funcionamiento automático del aparato de fraude que en tiempo de la dictadura reproducía los mismos guarismos, año tras año.

El sistema proporcional

Apenas hubo reforma, los paraguayos establecieron el sistema de elecciones directas y proporcionales (sistema D'Hont), no sólo para las elecciones nacionales, sino también para la interna de los partidos políticos y de las instituciones gremiales. Todas las candidaturas deben ser disputadas en elecciones internas directas antes de competir a otro nivel. Todos los cuerpos colegiados se integran internamente con el sistema D'Hont antes de integrarse a nivel nacional.

La Constitución Nacional de 1992 estableció un régimen presidencialista, bicameral, con representación regional en la Cámara de Diputados y uni-jurisdiccional (nacional) en el Senado. Además creó organismos de gobierno a nivel departamental (instancia política intermedia entre la nacional y la municipal). Los comicios de 1993 pusieron en concurrencia 312 cargos titulares y otros tantos suplentes: el de Presidente de la República, 19 gobernadores, 45 senadores, 80 diputados y 167 miembros de Juntas Gubernamentales. El resultado es la piel de tigre electoral, que caracteriza las democracias pluralistas, en las cuales no existen tanto mayorías electorales cuanto articulaciones mayoritarias de gobierno.

Pero el sistema proporcional tuvo otros usos. Los candidatos tuvieron que emprender campañas costosísimas en dinero. Esto creó, al mismo tiempo que formas ampliadas de participación, nuevas restricciones para las candidaturas y un estilo de competencia «plebiscitario audiovisual» donde buena parte de la victoria depende de la seducción televisiva y los fondos necesarios para financiarla. Así la elección interna del oficialista Partido Colorado (Asociación Nacional Republicana - ANR -) costó a los candidatos presidenciales con mayor número de votos sumas no menores a los 10 millones de dólares, semejante a la que después gastará el ganador en

la concurrencia nacional con otros partidos. Nadie sin estos medios compitió seriamente por la jefatura del Estado.

El doctor Guillermo Caballero Vargas buscó representar a un «tercer espacio» equidistante y alternativo a la política tradicional, con un nuevo populismo menos centrado en el clientelismo y más inclinado hacia la seducción publicitaria. Todos los candidatos insistieron sobre la necesidad del crecimiento económico y de atender a los reclamos sociales, las campañas sin embargo se diferenciaron en el destinatario de apelación. Los colorados apelaron sólo a los «correligionarios», lo que les resultó suficiente para ganar. Los liberales principalmente a sus afiliados que son los más leales; mientras que Encuentro Nacional es una candidatura independiente que se constituyó durante la campaña apelando a la ciudadanía en general «de todas las banderas».

Un poco de miedo ganó votos

Durante la campaña las encuestas señalaban mayoría de opositores, aun separados. Los resultados electorales fueron muy diferentes - ANR, 40%; Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), 32%; Alianza Encuentro Nacional (AEN), 23% -. Desplazamiento de los electores colorados que se reagruparon a última hora, debilitamiento de los encuentristas que se desorganizaron en el tramo final, polarización colorado-liberal en la tensión de último momento, lo cierto es que, contra todo pronóstico, el Ejecutivo fue ganado con comodidad por el oficialismo.

Fue chocante para todo el mundo, salvo para los interpelados, la campaña electoral realizada por el general Lino Oviedo, encargado de las operaciones de campo durante el golpe de Estado del 3 de febrero, quien declaró que el ejército y el coloradismo unidos gobernarán «per omnia secula seculorum». Todavía en Paraguay la totalidad de los oficiales está afiliada al Partido Colorado que fue, hasta el 3 de febrero, el partido del Estado; de ahí que en el país profundo y campesino el proselitismo militar fuera identificado como una orden.

Sin la participación de los militares en la campaña electoral, el oficialismo - desgarrado por la lucha entre Luis María Argaña y Juan Carlos Wasmosy - habría tenido mucha dificultad en ganar estas elecciones. Pero miedo a perder y a desobedecer fueron los elementos que finalmente inclinaron la balanza hacia el costado oficialista.

Una fiesta amarga

El 9 de mayo no fue una fiesta democrática. En primer lugar porque ese día hubo elementos que sin invalidar el proceso le quitaron brillo: un atentado con armas de guerra contra la antena de un canal de televisión cercano a la oposición (sin efecto esperado); ametrallamiento del auto de un periodista; corte de teléfonos del cómputo paralelo Sakä; cierre de las fronteras para impedir que regresaran a votar paraguayos residentes en el extranjero; acopio de numerosas actas en el local del partido oficialista (ANR) en lugar de la Junta Electoral Central.

Propuestas, programas, estilos

Difícilmente puede decirse que haya diferencias entre los programas de las fuerzas en concurrencia, la ANR, que candidató a Juan Carlos Wasmosy; el PLRA, que candidató a Domingo Laíno y la AEN, que respaldaba a Guillermo Caballero Vargas. (Otras seis candidaturas no sumaron entre todas el uno por ciento de los votos). Las diferencias son sin embargo enormes en términos de tradiciones políticas.

El ingeniero Wasmosy, hoy presidente electo de la república, representó la continuidad del poder y en particular del presidente Rodríguez y su entorno militar y empresarial. Wasmosy sostuvo una dura lucha interna dentro del propio partido oficialista en donde perdió las elecciones primero, antes de invertir el resultado a través de manipulaciones político-institucionales. El doctor Laíno representa la oposición tradicional liberal de origen oligárquico contra la dictadura de Alfredo Stroessner y el heredero del liberalismo, contendor secular del coloradismo. Ambos partidos tradicionales con más de 100 años de historia, se habían sucedido en los gobiernos pre-democráticos, desde fines del siglo pasado, a través de golpes de Estado, antes que el ejército decidiera hacerse de árbitro y de león en el reparto del poder.

Todas estas circunstancias no invalidan el hecho de que la mayor parte del electorado votó oficialismo, pero sí arrojan dudas sobre la voluntad política oficial de respetar los resultados en caso de haber sido adversos, así como sobre su voluntad democrática en general. De todas maneras, en casi todos los locales, el sufragio fue regular. Las omisiones opositoras dieron lugar a mini fraudes oficialistas pero ninguna estimación sería hacer pensar que estos hayan torcido los resultados. Tampoco fueron comprobadas las denuncias, hechas por el diputado liberal Francisco de Vargas, sobre la adulteración de los padrones electorales.

Las tensiones hicieron que nadie reconociera su derrota hasta que llegó el dictamen oficial, 20 días más tarde. En la noche del 9 de mayo Laíno y Wasmosy se declararon vencedores, Caballero manifestó que estaba obteniendo mayoría. Entre el 9 y el 31, todos los partidos políticos, incluso los observadores de la Organización de Estados Americanos, se pusieron a contar los votos acta por acta y a verificar que la Junta Electoral Central no hubiera alterado resultados.

Desde el punto de vista de los opositores la amargura consistió en la pérdida del Ejecutivo, que anhelaban conquistar. Desde el punto de vista de los oficialistas, la tristeza fue la pérdida del poder legislativo, y lo que ello implica, la falta de control sobre el poder judicial, ya que en el pasado todo gobierno paraguayo gobernó a los jueces y obtuvo de ellos obediencia. El futuro se presenta diferente.

Correlación de fuerzas

La participación electoral estuvo en el 69% (1.698.984 votantes, 1.172.883 electores), porcentaje cuyo nivel avala al proceso. El oficialismo conquistó para el Ejecutivo el 40% (39,91%) de los votos y para el Senado 42% (20 de las 45 bancas); 38 de las 80 bancas de diputaciones; 12 de las 17 gobernaciones.

La sorpresa post-electoral vino cuando se formaron las coaliciones parlamentarias. Al bloque opositor liberal-encuentrista se sumó la disidencia interna colorada enfrentada a Wasmosy. Eso da a la oposición, así ampliada, una mayoría que puede pasar el 66%, guarismo que le permite bloquear la voluntad del Ejecutivo en caso de disparidad de opiniones. Esa circunstancia ya pudo verse en la constitución de las comisiones y autoridades parlamentarias. El oficialismo, contando con sus votos, pensó que sólo necesitaba cooptar algún opositor para recuperar con alianzas lo perdido en las urnas. No sólo fue incapaz de potenciar su representación, perdió a los «correligionarios» argañistas quienes, burlados por el fraude partidario interno, no se reconocen en la dirección política oficial de su partido y hacen carpa junto a la oposición.

El presidente Wasmosy

Nadie puede prometer al presidente Juan Carlos Wasmosy un jardín de flores. El departamento donde se concentra el 25% de la población está en manos de un gobernador liberal. La municipalidad de la capital, Asunción, en manos de un independiente. Departamentos claves como Cordillera, Amambay y Concepción, son liberales. Del 40% de votos ganados, la mitad son del sector disidente de su propio

partido, y este sector actúa en el parlamento en conjunto con la oposición liberal-independiente que por sí sola tiene mayoría.

Antes de asumir el cargo, el ingeniero Wasmosy tiene un lenguaje conciliador y de concertación. Cuenta con apoyo de los poderes fácticos, que en Paraguay significa las Fuerzas Armadas y el gran empresariado, formado con la acumulación de dinero realizada durante la época del llamado «boom de Itaipú». Este empresariado «de Estado» maneja cuando menos el 40% del producto interno nacional, e hizo fortuna a través de concesiones gratuitas para la construcción de la gran represa de Itaipú - emprendimiento brasileño paraguayo de la década de los 70 -. Lo que al presidente electo le falta es apoyo político-institucional. Para acceder al poder el candidato oficial debió prender una vela a cada santo, en particular a sus socios empresarios y a su soporte militar, aunque también a la base político-partidaria cuyos «operadores» son quienes le dieron al final los votos.

Una política neoliberal agresiva le llevaría a aumentar las diferencias con su propio partido, muy acostumbrado a mantenerse unido a través de favores prebendarios. La privatización y achicamiento del Estado implicaría deshacerse de una base muy importante del poder colorado. Hay que considerar que toda la administración estatal está formada por y únicamente sus «correligionarios». Una política estatista tradicional empantanaría una economía pobre, de las más pobres de América Latina (con un ingreso per cápita anual bajo los mil dólares), que tuvo crecimiento cero en los 80 y crecimiento negativo en la década actual.

Y el futuro además presenta nuevos desafíos. En conjunto con Brasil, Argentina y Uruguay, el Paraguay emprende el proyecto del Mercosur, que deberá significar el fin de las fronteras arancelarias internas y la libre circulación de bienes y personas en toda la región de cerca de 200 millones de habitantes, entre los cuales los paraguayos son los 4 millones más pobres.

Hasta el momento, el ingeniero Wasmosy no se ha «descartado», luce por la prudencia y no da señales sobre cual será el rumbo de su administración. La contratación del ex-ministro chileno Hernán Büchi nos dice mucho sobre sus afinidades políticas, pero todavía no alcanza para prefigurar cuál será su política real.

Sin sobresaltos ni brillo

Más allá de todo romanticismo partidario de un cambio rápido, el proceso institucional tiene visos de funcionar en la nueva situación. La oportunidad única en la

historia del Paraguay está en la constitución de un Poder Judicial respetable y poderoso. Las bases constitucionales están hoy sentadas para que ello ocurra y las circunstancias políticas también.

El poder judicial deberá nacer de negociaciones entre opositores y oficialistas en una relación tal que no podrá haber imposiciones. Sólo de un consenso sobre el tema se puede esperar que los crónicos problemas de corrupción tengan una plataforma desde la cual ser solucionados (Paraguay es el país del contrabando que, cuanto menos, representa la mitad del comercio exterior; también es el de la evasión fiscal).

En cuanto a la cuestión social, agudizada por más de una década de estancamiento económico y por las condiciones crecientemente competitivas de los mercados internacionales tanto como la cuestión económica, habrá que ver si el presidente empresario consigue lograr lo que no pudo su antecesor, Andrés Rodríguez, y tampoco, en los últimos años su pre-antecesor, el dictador Alfredo Stroessner.

De la mansa transición paraguaya no puede esperarse grandes sorpresas, pero tampoco ha pasado en balde el tiempo político.

Asunción, julio de 1993.